

EL VENTRÍLOCUO

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

La desestructuración que ha venido provocando esta crisis en nuestro tejido productivo y en nuestro mercado de trabajo, desde que estalló hace ya casi tres años, corre en estos momentos un serio riesgo de perpetuarse si no conseguimos dinamizar la actividad productiva, recuperar el empleo destruido y frenar la fractura social de un creciente número de familias que carecen de recursos y de coberturas sociales. Y, lamentablemente, las últimas medidas dictadas por el Gobierno no marchan en esa dirección, sino en la opuesta. Lejos de alentar mejores perspectivas, arrojan aún más sombras al futuro económico de nuestro país.

La reducción de salarios, la congelación de las pensiones, la subida de la imposición indirecta o el cuestionamiento de la protección por desempleo, tendrán efectos muy negativos sobre el consumo; y el freno de la inversión pública y de las políticas sociales, lastrará la capacidad de las empresas y de las familias para salir adelante.

Se ha tratado por todos los medios de maquillar la incongruencia de las decisiones que se están tomando con un falso halo de inevitable necesidad, cuando lo cierto es que las cifras hablan por sí solas: durante la extensa etapa de crecimiento que precedió a la crisis, el peso del gasto social respecto al PIB español se mantuvo invariable, así que ni la evolución del gasto social ha sido proporcional al crecimiento económico cuando éste era positivo, ni puede decirse que España, precisamente, haya tirado la casa por la ventana en este sentido (ya que en la Europa de los 15 sigue estando a la cola en cuanto a recursos puestos a tal fin). En cambio, sí que se han descuidado los ingresos: de una forma u otra se ha consentido el desarrollo de una cultura del fraude ya enquistada hasta el tuétano de nuestra economía, y no se ha abordado la necesidad de hacer de nuestro sistema tributario un sistema equitativo, progresivo, solidario y justo.

Y todo esto no es sino una cuestión de voluntad y decisión política. Hay un modo de organizarnos diferente al que se nos vende como único posible. Tenemos que responder a las necesidades de las personas y no a las de los mercados.

Mientras que las rentas del trabajo pierden peso, engorda el poder de influencia y agresión de los grandes grupos financieros y empresariales, los especulativos, los que se enriquecen sin crear riqueza. Y se ha llegado hasta el punto de conseguir pervertir un sistema democrático a través de esta suerte de oligarquía económica, que en estos momentos ejerce de privilegiado ventrílocuo de los Gobiernos de medio mundo.

Y lo que realmente decepciona e indigna es que la respuesta de los Gobiernos no ha sido la de regular de una vez por todas el sistema financiero, sino la de lanzarse a la carrera de los ajustes sociales y las concesiones en el retroceso de lo público. No hace falta ser muy avisado para darse cuenta de que el debilitamiento del Estado, la privatización de los servicios públicos, el desgaste del sistema público de pensiones, los ataques contra las organizaciones sindicales o la devaluación del mercado de trabajo, tienen los mismos pocos beneficiarios de siempre y los mismos muchos damnificados de siempre.

Desgraciadamente el Ejecutivo español se ha decantado por una política que sólo satisface a los primeros y que lejos de poner fin a la sangría de empleo que vivimos, nos restará derechos y empeorará nuestras condiciones de trabajo, obstaculizará el crecimiento económico y asestará el golpe de gracia a millones de familias que se sostienen únicamente con el amparo de la protección social.

Los trabajadores y trabajadoras de esta Región, de este país, de Europa entera, tenemos el coraje de hablar por nosotros mismos, sin ventrílocuos de ninguna clase, y tenemos la oportunidad de expresarnos de la forma más enérgica y contundente que nos permite nuestra Constitución, a través de una huelga que plante cara a esta cadena de agresiones contra lo público, contra la seguridad de los pensionistas actuales y futuros, contra la oportunidad que le debemos a los más jóvenes de sacar adelante sus proyectos de vida, contra los derechos de los trabajadores, contra la protección de los desempleados, contra el propio Estado del bienestar.

Yo estoy convencido de que el 29 de septiembre conseguiremos, sólo por un día de salario, demostrar que el trabajo digno y en condiciones debe ser la base de una economía productiva y sostenible. Conseguiremos demostrar la solidaridad y la unión de todos los trabajadores, pensionistas y desempleados; demostraremos que existe conciencia social en este país y que la democracia nos permite algo más que un voto cada cuatro años.

Antonio Jiménez Sánchez es Secretario general de UGT de la Región de Murcia